

**Intervención PL que busca prohibir que la rendición de evaluaciones y la entrega de títulos sea condicionada al pago de deudas arancelarias – (Boletín 15.831-04). (jvg)**

Respecto de este proyecto de ley, debo señalar que se trata de un tema que en principio debiese quedar a la resolución de las partes, es decir, por una parte el estudiante, su familia, o quien se haga responsable financieramente de su situación y por otra el establecimiento de educación superior que debe ejercer el cobro de las obligaciones pecuniarias contraídas a su favor, pues bien, según los autores del proyecto antes de la ley 21.091, al no encontrarse regulada esta situación, los estudiantes que veían retenidos sus títulos por deudas de arancel recurrían a los tribunales por vía recurso de protección, los cuales eran mayoritariamente acogidos por los tribunales por vulneraciones de las garantías de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad. En otros casos, acudían a la División de Educación Superior del Mineduc, la cual le hacía presente a las instituciones del criterio jurisprudencia, solicitando que se entregaran los documentos.

Con la dictación de la mencionada ley, en virtud del artículo 55 letra e), algunas universidades han retenido títulos cuando se adeudaban aranceles previamente establecidos en su reglamentación respectiva y debidamente informados a los estudiantes. Ante esto, algunos alumnos han vuelto recurrir a tribunales. En este nuevo escenario las instituciones se han amparado en la excepción contenida en el artículo 55.

En la mayoría de estos casos, los tribunales han resuelto acoger los recursos interpuestos por los estudiantes, interpretando que el artículo 55 comenzó a regir desde su publicación, es decir, desde el 29 de mayo de 2018, sin que se le diera aplicación retroactiva. Por esto, dicha norma no aplicaría para los alumnos que hubiesen ingresado a cursar sus estudios con anterioridad a esa fecha. De esta forma los tribunales han seguido fallando en favor de los estudiantes perjudicados por estas medidas.

El problema, no obstante, surge al aplicar el razonamiento utilizado por los tribunales, pues llevaría a concluir que las Universidades sí podrán retener los títulos a aquellos estudiantes que hayan empezado a cursar sus estudios después de 2018. Este es precisamente el problema que el proyecto busca abordar, prohibiendo bajo toda circunstancia la retención de títulos a estudiantes por tener pagos de arancel pendientes.

Si bien el proyecto es breve y busca resolver una situación específica, ha sido objeto de debate durante su tramitación. Por un lado, a juicio de sus promotores, no correspondería que se retengan los títulos a los estudiantes dado que ellos, al cumplir con los requisitos académicos, ya contarían con los conocimientos y aprendizajes que dichos títulos buscan acreditar. Estos conocimientos ya serían parte de su patrimonio inmaterial. A su vez, señalan que el proyecto buscaría avanzar en la consagración de la educación como un derecho social, el cual no puede estar sujeto a las condiciones económicas de la persona.

Sin embargo, se han levantado críticas al proyecto. Así, por ejemplo, desde el CRUCH se ha señalado que el proyecto podría generar costos importantes para las universidades, dado que generaría un incentivo para el no pago de las deudas generadas por aranceles. La anterior situación podría impactar en el presupuesto y en la situación financiera de las universidades. Asimismo, en la discusión en la Cámara se advirtió que impedir la retención de títulos bajo cualquier circunstancia, podría devenir en que se vuelva costumbre el no pago de los aranceles en los últimos semestres de sus carreras por parte de los estudiantes.

Además, resulta fundamental hacer presente los elevados aranceles de titulación establecidos por los planteles de educación superior en los últimos años, así para el año 2024, los más altos en promedio son los establecidos por los institutos profesionales que ascienden en promedio a \$238.524.-, las universidades privadas que cobran en promedio \$165.836.- y los CFT privados que promedian \$180.086.-; esto sin considerar los costos de exámenes de grado, título y tesis conducentes al grado académico o título.

Sin perjuicio de lo anterior, con la indicación que hemos presentado se acota bastante el proyecto original pues hemos propuesto limitar la prohibición sólo a la rendición de exámenes de grado o de titulación, ya que originalmente el proyecto prohibía condicionar al cumplimiento de obligaciones pecuniarias, otras evaluaciones distintas del examen de grado o titulación.

Estimados colegas, si bien es un proyecto que resulta difícil de abordar ya que, como lo he señalado, esta moción trata de resolver situaciones que corresponde a las partes, quienes han suscrito un contrato de prestación de servicios de educación, y que naturalmente no resulta razonable que por criterios financieros se interrumpa el proceso de titulación de un estudiante, tampoco resulta razonable que las instituciones sufran riesgos en su financiamiento por el eventual incumplimiento de obligaciones que una norma como esta podría acarrear, creo que podemos trabajar para arribar a un justo equilibrio en el sentido de no coartar la vida profesional por motivos financieros y que las instituciones de educación superior puedan cautelar el efectivo cumplimiento de las obligaciones que los estudiantes y sus familias tienen con ellos.

Por lo anterior y estimando que se trata de una discusión que debemos dar y que hemos presentado una indicación que nos entrega la tranquilidad de acotar considerablemente el texto de la norma propuesta, doy la aprobación al presente proyecto de ley.

**Intervención PL que Establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso - (Boletín N° 14.309-04).**

Estimados colegas, las cifras que arroja actualmente nuestro sistema escolar son preocupantes respecto de la cantidad de alumnos que lo abandonan.

La modalidad de reingreso ya fue aprobada por el Consejo Nacional de Educación en 2021, pero nunca se creó la subvención que la financiaría.

En efecto, según cifras publicadas por el Mineduc, durante el período de 1 año, entre 2021 y 2022, 50.815 estudiantes fueron desvinculados del sistema escolar. Esta cifra da cuenta de un aumento en casi 6.000 estudiantes, lo que corresponde a un alza del 24% desde la pandemia y que a pesar de que la pandemia ha quedado atrás las cifras en los períodos siguientes no son alentadoras. Por otra parte, de los estudiantes desvinculados del sistema escolar del año 2022, se logró revincular 17.069 estudiantes, lo que representa una tasa de revinculación de apenas del 38%.

A estas cifras se les agrega el hecho que, desde el 2004 hasta el 2021, 227.000 personas -de entre los 5 hasta los 24 años- no se encuentran registradas en el sistema de educación. La situación no pareciera mejorar ya que, en abril de 2024, en nuestro sistema escolar, un total de 676.571 alumnos presentaron niveles de inasistencia grave, perdiendo más del 15% de asistencia a clases. Cabe recordar que, la inmensa mayoría de los casos de deserción escolar, suelen ser anteceditos por alto niveles de inasistencia.

En definitiva, urge que tengamos un instrumento que facilite el reingreso de los estudiantes que por distintos motivos han desertado de la educación formal.

Enfrentados a esta ardua tarea, creemos que como miembros del Senado de la República debemos contribuir entregando herramientas para enfrentar este grave flagelo que sufren quienes finalmente quedan al margen de la educación formal.

Este proyecto de Ley es un importante avance frente a tal situación, pues crea un sistema de subvenciones que estará compuesto por (1) una subvención base de reingreso, que puede ser incrementada por factor de zona y de ruralidad, y (2) una subvención especial por vulnerabilidad para estudiantes prioritarios y preferentes.

Para poder optar a estas subvenciones, los establecimientos educacionales según el proyecto de ley original deberán contar con una serie de requisitos como reconocimiento oficial, destinar la subvención a fines educativos, que el sostenedor sea una persona jurídica sin fines de lucro, que no existan cobros y otros enfocados a asegurar que el aporte llegue a los beneficiarios

El proyecto tiene como universo de beneficiarios los alumnos entre 12 y 21 años que hayan estado al menos 2 años fuera del sistema escolar, y se vuelvan a integrar a través de la modalidad de reingreso. Este grupo hoy puede estar en alguna de las siguientes tres situaciones:

- a. Desertores: Personas que se han desvinculado por dos años o más de los programas de educación formal. Para estimar el número de desertores que reingresarían a través de esta modalidad se usó el estudio de “Trayectorias Educativas”.
- b. Estudiante de establecimiento en tercera jornada: establecimientos que son escuelas en el día, y en el vespertino ofrecen Educación de Adultos. A fines de 2020 ascendían a 15.861.
- c. Estudiantes de Centros de Educación Integrada de Adultos (CEIA): a diciembre de 2020 estos ascendían a 38.908 alumnos.

Por esto, desde las Comisiones de Educación y Hacienda, hemos analizado en profundidad el proyecto que hoy debemos votar en general.

Es menester señalar además que el proyecto cuenta con Informe Financiero y establece una implementación progresiva de 5 años, estableciéndose que en régimen debiera permitir el reingreso de 66.413 estudiantes; teniendo, además en régimen, un costo aproximado de 37.727 millones de pesos, montos correspondientes al año 2021, lo que tiene que ser corregido por reajustabilidad a cifras actuales, que finalmente ascendería a una cifra de alrededor de los 42 mil millones de pesos.

Estimados colegas, estamos convencidos de que la revinculación escolar es una de las herramientas más eficaces para que las jóvenes generaciones se mantengan por el camino de la virtud, el mérito y el trabajo honesto; y además estamos ciertos de que mantenerlos en el sistema educacional formal posibilita el acceso a la educación superior, con los consecuentes efectos positivos.

No queremos ver que se repitan situaciones como el triste cierre de las escuelas de reingreso de la Fundación Súmate del Hogar de Cristo en Bio – Bio, no queremos que se coarte la posibilidad de reincorporarse en la vida escolar por falta de recursos. Necesitamos hacernos cargo como Estado de esta realidad.

Por último, quiero señalar que este proyecto que regula y financia el reingreso educacional, es un proyecto de ley ingresado por el Gobierno del Presidente Piñera, y que ya a estas alturas lleva varios años de tramitación, por lo que es fundamental que el Ejecutivo hoy se haga presente actualizando las cifras y presentando indicaciones que permitan darle mejor viabilidad a este proyecto; si es necesario realizar ajustes, es parte de la discusión, pero no podemos seguir ignorando este tema que requiere una atención de parte del Estado. Por todos los argumentos señalados, los invito a votar a favor del presente proyecto de ley.

## **Minuta Estado de Situación de PL Sala Cuna. (Boletín 14.782-13)**

Jorge Villar Gutiérrez.

Abogado.

Preparado sobre la base de antecedentes citados.

### **I. Antecedentes:**

El proyecto fue ingresado el día 4 de enero de 2022, durante el Gobierno del Presidente Piñera.

### **RESUMEN EJECUTIVO**

INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY, EN PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE EQUIPARA EL DERECHO DE SALA CUNA PARA LAS TRABAJADORAS, LOS TRABAJADORES Y LOS INDEPENDIENTES QUE INDICA, EN LAS CONDICIONES QUE ESTABLECE, MODIFICA EL CÓDIGO DEL TRABAJO PARA TALES EFECTOS Y CREA UN FONDO SOLIDARIO DE SALA CUNA  
(BOLETÍN N°14.782-13)

### **I. OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:**

-Establecer el derecho a acceder a sala cuna con independencia del número de trabajadoras que se desempeñe para un mismo empleador.

-Crear un Fondo de Sala Cuna a partir del cual se entregará un aporte a los empleadores de trabajadores dependientes, a los empleadores persona natural y a los trabajadores independientes.

-Crear un Registro Nacional de Cuidadores, con el objetivo de incorporar en una sola plataforma los antecedentes actualizados de los cuidadores y las cuidadoras de niños y niñas menores de dos años.

II. ACUERDOS: Aprobado, en general, por la mayoría de los integrantes presentes de la Comisión (3x1).

III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN: Consta de 16 artículos permanentes y seis artículos transitorios.

IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL: No tiene.

V. URGENCIA: Sin urgencia.

VI. ORIGEN E INICIATIVA: Senado. Mensaje de Su Excelencia el ex Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique.

VII TRÁMITE CONSTITUCIONAL: Primero.

VIII. INICIO DE LATRAMITACIÓN EN EL SENADO: 4 de enero de 2022.

IX. TRÁMITE REGLAMENTARIO: Primer informe, en general. Anteriormente, fue estudiado en general por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

X. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:

- Código del Trabajo.
- Decreto ley N°3.500, de 1980, que establece nuevo sistema de pensiones.

(Fuente: 2º Informe Comisión de Trabajo)

INDICACIÓN SUSTITUTIVA DEL EJECUTIVO. (Fuente Informe Abog. Juan Carlos Gazmuri)

La presentación de la indicación sustitutiva por el Ejecutivo se produce luego de la aprobación en general del proyecto por parte de la sala del Senado el 2 de abril de este año. Con la presentación de esta indicación, materializada el día 6 de mayo, el Gobierno vino a cumplir un compromiso que estaba pendiente desde el año 2022 cuando el proyecto inició su tramitación en la Comisión del Trabajo del Senado.

## II. Comentario general a la indicación sustitutiva:

En término generales, cabe señalar que, a través de su indicación sustitutiva el gobierno adoptó una propuesta de financiamiento de la Sala Cuna que no difiere mucho, en cuanto a su estructura, de la que había propuesto el gobierno anterior.

En este sentido, la indicación mantiene la idea de modificar el artículo 203 del Código del Trabajo, extendiendo la obligación de proveer el servicio de sala cuna a todos los empleadores, sin importar la cantidad de trabajadoras con las que tengan. Se elimina así la regla de las 20 trabajadoras, la cuya se traducía en una abierta discriminación para las mujeres de nuestro país.

Asimismo, el proyecto también crea un “Fondo de Sala Cuna” que se buscará financiar por medio de un porcentaje de cotización general de todos los trabajadores a nivel nacional, y el cual se traducirá en un “Aporte de Sala Cuna” destinado a solventar y financiar los servicios de Sala Cuna. De esta forma, en términos de la estructura macro del mecanismo de financiamiento, la indicación sustitutiva no innova demasiado.

A pesar de lo anterior, la indicación contiene varias diferencias relevantes con el proyecto aprobado en general, a las cuales se les debe prestar atención. En este sentido, se vislumbran tanto cambios positivos y como otros negativos que debiesen ser corregidos en la discusión en particular que ahora se inicia.

### III. Modificaciones positivas de la indicación sustitutiva.

1. Ampliación del derecho a padres trabajadores en general. Cabe destacar que la propuesta del Ejecutivo amplía el beneficio de sala cuna, ya no sólo a las mujeres trabajadoras con hijos de menores de dos años y a los hombres trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del menor (como se contemplaba en el proyecto original), sino que ahora también se incluye a los padres trabajadores cuando estos tengan el cuidado compartido.

En esta nueva hipótesis en que ambos padres tienen el cuidado personal, deberán presentar un acuerdo señalando cuál de ellos generará el derecho de sala cuna. Cabe advertir que esta extensión aumenta significativamente el universo de potenciales beneficiarios. Así, si en el proyecto aprobado en general se estimaba que el aporte de sala cuna se extendería a 80.000 beneficiarios, con esta extensión el proyecto incluiría a cerca de 150.000 nuevos beneficiarios.

2. Aumento en el porcentaje de cotización: a su vez, la indicación sustitutiva aumenta el porcentaje de la cotización que se destinará al financiamiento del Fondo Sala Cuna. Así, si en el proyecto original se establecía una cotización del 0,1% destinado a financiar el Fondo, el Ejecutivo propone aumentar esa cotización al 0,2%. Esto puede considerarse como un elemento positivo, toda vez que había sido ampliamente señalado que el porcentaje de 0,1% resultaba insuficiente para financiar los costos asociados al proyecto.

### IV. Elementos negativos de la indicación sustitutiva.

1. Se reduce el monto máximo del Aporte de Sala Cuna y se deja al Ejecutivo la determinación final del monto del Aporte. En este punto la indicación se distancia sustantivamente del proyecto aprobado en general. Esto ya que, en este último el monto del Aporte quedaba determinado en la misma ley y este disminuía cuando se trataba de empresas de mayor tamaño (así, era de \$372.500 mensuales para las micro, \$182.000 para las pequeñas, \$86.800 para las medianas y \$31.000 para las grandes empresas).

Por el contrario, la indicación sustitutiva establece que el tope máximo del Aporte será de 4,11 UTM (\$269.000) y que será el Ministerio de Educación, en conjunto con los Ministerios de Hacienda y Trabajo y Previsión Social, los que establecerán por -vía reglamento- los mecanismos para determinar al monto efectivo del Aporte de Sala Cuna que se pagará. Más allá de la indefinición respecto del monto efectivo del Aporte, al reducir el monto máximo a 4,11 UTM la indicación sustitutiva fija el monto bien por debajo del costo efectivo de la sala cuna. No obstante, cabe señalar que la eliminación de la distinción entre tipos de empresas es considerada un cambio positivo en comparación al proyecto aprobado en general.

2. Exclusión del Aporte de Sala Cuna a las salas cunas privadas que hoy no reciben aportes del Estado. Esta exclusión resulta de toda gravedad, ya que termina dándole una injustificada preferencia a las salas cunas que hoy reciben aportes del Estado y limitando la libre elección de los padres respecto de la sala cuna a la cual quieran llevar a sus hijos. Cabe señalar, eso sí, que esta exclusión no se establece de forma explícita, sino que sólo indirectamente por la vía de los requisitos que se exigen a las salas cunas para que puedan recibir el financiamiento respectivo. Así, a lo largo de toda la indicación sustitutiva solo se hace referencia a las salas cunas que cuenten con reconocimiento oficial (RO), excluyendo a las que hoy cuentan con autorización de funcionamiento (AF).

Frente a este punto, cabe señalar que actualmente en el nivel parvulario el sistema de certificación contempla que el reconocimiento oficial (RO) sólo para aquellos establecimientos estatales o que reciban financiamiento del Estado, dejando la autorización de funcionamiento para los establecimientos privados que no reciben financiamiento del Estado. Así, sin decirlo explícitamente, el proyecto busca que el “Aporte de Sala Cuna” sólo pueda destinarse a las Salas Cunas administradas o dependientes (vía transferencia de fondo) de Junji y de Integra excluyendo a demás establecimientos particulares.

3. Se establece que el pago del Aporte será directo a la sala cuna, dando poca claridad respecto de la situación en la que queda el empleador. En el proyecto aprobado en general, se establecía que el “Aporte Sala Cuna” se le pagaba al empleador como un reembolso por el gasto en que debe incurrir para contratar o proveer el servicio de sala cuna. Así, cualquier diferencia que se generase entre el monto del Aporte y el valor efectivo de la sala cuna, debía ser necesariamente solventada por el empleador.

La indicación sustitutiva, en cambio, establece que el Instituto de Previsión Social (IPS) pagará directamente el Aporte a la respectiva sala cuna. Esto, a pesar de que la obligación legal de proveer el servicio de sala cuna es, en estricto rigor, del empleador. De esta forma, no queda claro, por ejemplo, cómo deberá entonces el empleador pagar el saldo entre el monto del Aporte y el valor efectivo de la sala cuna que se estará contratando.

#### COMENTARIO:

1. El último movimiento que tiene el PL corresponde al Segundo Informe de Comisión de Trabajo y Previsión Social, que emitió el Segundo informe en Primer Trámite Constitucional, con fecha 7 de mayo de 2024.
2. Con fecha 6 de mayo de 2024 tiene Informe Financiero, Oficio I.F. 113.
3. A continuación debe ser analizado en particular primero por Trabajo y previsión Social y luego por Educación.